

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	EJECUTIVO
DEMANDANTE	FEDERACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA SALUD “FEDSALUD”
DEMANDADOS	INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA “IPS UNIVERSITARIA” HOY HOSPITAL MATER
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN DE SENTENCIA-
PROCEDENCIA	JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 005 2018 00184 05 INTERNO 2023 – 182
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 178
TEMAS	OPORTUNIDAD PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA.
DECISIÓN	CONFIRMA

Medellín, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Mediante la presente providencia, la Sala Dual se ocupará de decidir el recurso de súplica interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante, contra el auto de fecha 21 de julio de 2023, proferido en la causa de la referencia por la Magistrada Sustanciadora Dra. Alba Lucía Goyeneche Guevara y mediante el cual se negó la solicitud de decreto y práctica de pruebas en segunda instancia. Previo a ello, se hará pronunciamiento en relación con la solicitud de efectuar control de legalidad al traslado que del recurso de súplica se hizo a la parte contraria, por así haberlo solicitado la apoderada judicial de la parte demandante.

I. ANTECEDENTES

Según se infiere del expediente conformado con ocasión del recurso de súplica, en el presente proceso ejecutivo fue proferida sentencia de primera instancia, la cual fue objeto de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, cuyo conocimiento le fue asignado al despacho que hoy regenta la Dra. Alba Lucía Goyeneche Guevara, recurso que fue admitido mediante auto de 31 de mayo de 2019, así se afirma en los archivos digitales 13 y 25.

Durante el trámite de la segunda instancia fue admitida la alzada, se surtieron algunas otras actuaciones con posterioridad a ello, como reconocimiento de personería a una nueva apoderada de la parte demandante (Archivo digital 08), intervención del Dr. Diego Estrada Giraldo, Procurador 10 Judicial II vinculado a la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles mediante memorial de 29 de noviembre de 2022 (Archivo digital 12), emitiéndose respuesta frente a su requerimiento por quien en ese momento era titular del despacho al que le fue asignado el conocimiento del proceso (Archivo digital 13). Luego, a través de memorial remitido por correo electrónico el 28 de junio de 2023 (Archivos digitales 20 y 21), la apoderada judicial de la demandante, Federación Gremial de Trabajadores de la Salud FEDSALUD, solicitó el decreto de pruebas en segunda instancia, aduciendo que se trata de pruebas sobrevinientes, petición a la que no accedió la ponente a través del proveído dictado el 21 de julio de 2023 (Archivo digital 25).

II. LA SÚPLICA

Contra la anterior determinación la señora apoderada de la parte demandante interpuso recurso de súplica, el cual argumentó diciendo que no comparte la negativa del decreto de pruebas porque desde el mismo escrito en el que las solicitó, indicó que se trataba de pruebas sobrevinientes y por tanto eran una excepción al régimen probatorio, pues no existían al momento de la presentación de la demanda, ni cuando se trabó la Litis, ni en el traslado de las excepciones de mérito, ni dentro del término de ejecutoria del auto que admitió la alzada. Que por tal motivo pidió que los documentos se incorporaran al plenario, ya que son pertinentes, conducentes, útiles y necesarios para mayor claridad en relación con el objeto del proceso, en atención a que ratifican el grave incumplimiento de la IPS Universitaria al Contrato de Transacción No. 001 de 2017, y los contratos prorrogados, situación que le imprime la exigibilidad al título ejecutivo presentado al cobro.

Aduce que resulta entonces incongruente exigir que se debió cumplir con lo estipulado en el artículo 327 del C.G.P., porque desde el mismo escrito se acudió a una excepción para allegar material probatorio con posterioridad a los escenarios previstos de la ley, debido a que se desconocía su existencia, como es la prueba sobreviniente. Que si bien es cierto, el recurso de apelación instaurado en contra de la sentencia fue admitido mediante auto del 31 de mayo de 2019, y la petición o aportación de pruebas debió realizarse dentro de

los tres días siguientes a la fecha en que fue notificado, esto es, 5 de junio de la misma anualidad, para dicha fecha no existían las pruebas aportadas, conclusión que salta a la vista si se verifica una a una la fecha de creación de la prueba documental aportada, la cual fue con posterioridad al 5 de junio de 2019, por tanto no era posible su aportación al proceso (Archivo digital 27).

De la súplica se corrió traslado secretarial a la parte contraria, recibíendose pronunciamiento el día 4 de agosto de 2023 mediante el cual se opone a la prosperidad del recurso, exponiendo en síntesis que el auto recurrido debe ser confirmado porque la solicitud probatoria resulta extemporánea, además de confundir lo que son hechos novedosos con los documentos que como prueba se pretenden incorporar, no cumpliéndose en todo caso los presupuestos del artículo 327 del C.G.P. (Archivo digital 29).

Con posterioridad, se recibieron sendos escritos de la apoderada judicial de la parte demandante (Archivos digitales 34 y 36), pidiendo que se efectúe control de legalidad al trámite impartido al recurso de súplica, toda vez que el recurso se interpuso dentro del término estipulado en el artículo 331 del C.G.P., y se hizo remisión de copia de éste al canal digital de la contra parte. Que el día 2 de agosto de 2023 la Secretaría de esta Sala, corrió traslado de conformidad con lo reglado en el artículo 110 del C.G.P., olvidando articular dicha norma con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 2213 de 2022, el cual prescribe que se prescindirá de dicho traslado, si se hace remisión del escrito al canal digital de la contraparte, como en efecto sucedió en el presente caso.

Advierte que, con ese proceder, la Secretaría de la Sala, en contravía de la norma, revive un término que ya estaba en curso, esto es da traslado nuevamente a la parte contraria, pese a que ya se le había remitido copia del recurso a su correo electrónico el día 27 de julio de 2023, por tanto, el término de traslado había iniciado transcurridos dos (2) días hábiles de la recepción del correo, esto es entre 1 de agosto de 2023 y el 03 de agosto de 2023. Por lo anterior, pide que se corrija esa situación, porque *“podría generar irregularidades dentro del proceso y nulidades por violación al debido proceso, de conformidad con el artículo 132 del CGP”*.

III. CONSIDERACIONES

1. Sea lo primero hacer referencia a la petición de efectuar control de legalidad en relación con el traslado del recurso de súplica que se hiciera a la parte contraria, por parte de la Secretaría de esta Sala, advirtiendo desde ya que no hay lugar a corregir actuación alguna porque no se evidencia arbitrariedad o irregularidad que deba ser corregida.

Para resolver tal situación que hace alusión es al traslado automático, se remite la sala al tenor literal del párrafo del artículo 9° de la Ley 2213 de 2022, el cual prescribe:

PARÁGRAFO. Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por Secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.

Téngase en cuenta que la norma indica que tal traslado automático se entiende realizado a los 2 días hábiles siguientes de hacerse el envío del mensaje, pero agregando el mismo texto de la norma que, el término respectivo comenzará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio, constatar el acceso del destinatario al mensaje, situación que no estaba clara en el presente caso, por cuanto en el expediente únicamente obraba la constancia de envío del escrito del recurso de súplica que hizo la parte demandante a su contraparte, empero con ello no era suficiente para tener certeza de la recepción del mensaje o del acceso del destinatario a éste; de manera que imposible resulta indicar que se equivocó la secretaria de la sala al conceder el respectivo traslado.

Es que incluso para corregir la posibilidad de que se entendiera corrido el traslado sin la certeza de haber sido recibido el mensaje por el destinatario, fue que la Corte Constitucional en la Sentencia C-420 de 2020 cuando estudió la constitucionalidad del Decreto 806 de 2020, decidió declarar condicionalmente exequible la norma contenida en el párrafo del artículo 9° del mentado Decreto, el cual valga indicar difería en parte con la actual norma de la Ley 2213 de 2022, precisamente porque se acogió lo dicho por la Corte; en dicha providencia así se manifestó la Corte Constitucional:

392. Al examinar el inciso 3 del artículo 8° y el párrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo 806 de 2020, la Corte encontró que tal como fueron adoptadas las disposiciones es posible interpretar que el hito para calcular el inicio de los términos de ejecutoria de la decisión notificada –en relación con la primera disposición– o del traslado de que trata la segunda disposición, no correspondan a la fecha de recepción del mensaje en el correo electrónico de destino, sino a la fecha de envío. Esta interpretación desconoce la garantía constitucional de publicidad y por lo mismo contradice la Constitución, en tanto implica admitir que, aun en los eventos en que el mensaje no haya sido efectivamente recibido en el correo de destino, la notificación o el traslado se tendría por surtido por el solo hecho de haber transcurrido dos días desde su envío. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del inciso 3 del artículo 8° y del párrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub examine en el entendido de que el término de dos (02) días allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione, acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.

De esta manera, se despacha desfavorablemente la solicitud de considerar extemporáneo el pronunciamiento que frente al recurso de súplica presentó la parte demandada, que es finalmente el objetivo perseguido al solicitar que se efectúe el control de legalidad.

2. Ahora ocupándose la sala de decidir el recurso de súplica, se debe reconocer la procedencia del medio de impugnación elegido para cuestionar la decisión de negar el decreto de pruebas pedida por la parte demandante en sede de segunda instancia, en tanto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 321 del Código General del Proceso el auto que niegue el decreto o la práctica de pruebas es apelable y, por tanto, en sede de segunda instancia es susceptible del recurso de súplica (art. 331 C.G.P.).

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 327 del Código General del Proceso, el decreto y práctica de medios de convicción en segunda instancia está previsto únicamente para aquellos supuestos en los cuales: (i) las partes solicitan la prueba de común acuerdo; (ii) a pesar de estar decretados los medios de convicción en primera instancia se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió; (iii) la prueba verse sobre hechos posteriores a la oportunidad de petición de pruebas en primera instancia; (iv) se pretenda aportar documentos que no se adujeron en primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria y; (v) se pretenden aportar documentos que persigan desvirtuar los antes mencionados.

Empero tal posibilidad está sujeta a una oportunidad consagrada en el inciso 1° del artículo 327 del C.G.P. y oportunidad procesal a la que también hace referencia el inciso 2° del artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, esto es *“dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación”*, disposición normativa que debe respetarse por tratarse de norma procedimental de orden público y cuya consagración y acatamiento implican trascendentales asuntos como el respeto al debido proceso dentro del que se incluye el derecho de defensa y contradicción, así como la lealtad procesal.

Téngase en cuenta que en el presente asunto el recurso de apelación presentado frente a la sentencia fue admitido mediante auto de 31 de mayo de 2019, siendo el término de ejecutoria de dicha providencia, la oportunidad en términos temporales, para que se elevaran las solicitudes probatorias en segunda instancia, obviamente con el cumplimiento de los demás condicionamientos que, según la norma, hacen viable tal posibilidad. Y que no se piense que por el tiempo que permanezca el expediente a despacho pendiente de resolverse la segunda instancia, se amplía a las partes la posibilidad de aportar al proceso las pruebas que con el transcurrir del tiempo estimen convenientes, pues se insiste, el derecho a probar debe ser respetado en doble sentido e implica brindar a las partes del proceso la oportunidad de solicitar pruebas, el decreto de las mismas y la posibilidad de pronunciarse sobre ellas en ejercicio de los derechos de defensa y contradicción, por lo que se justifica la consagración de términos y oportunidades probatorias y de requisitos para su solicitud decreto y práctica. Los anteriores motivos, sirven de sustento para despachar también el argumento expuesto a través del recurso de súplica, según el cual se pedía hacer una excepción a la norma que consagra las oportunidades probatorias en segunda instancia.

En síntesis, habiéndose admitido el recurso de apelación frente a la sentencia proferida en primera instancia mediante auto de 31 de mayo de 2019, notificado por estados de 5 de junio de esa misma anualidad y presentado el escrito de solicitud probatoria el 28 de junio de 2023, emerge nítido que no se cumple con los requisitos para el decreto de pruebas a petición de parte en sede de segunda instancia (Art. 327 C.G.P.).

En consecuencia, se confirmará la decisión recurrida en súplica.

Finalmente, en obediencia a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del C.G.P., en concordancia con el Acuerdo PSAA16-10554 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se fijará en esta misma providencia el valor a tener en cuenta como agencias en derecho en la liquidación de costas del recurso que deberá efectuar el juzgado de primer grado, lo cual se hace en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente a favor de la demandada Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia “IPS UNIVERSITARIA”, hoy Hospital Alma Máter, quien describió el traslado del presente recurso.

Por lo expuesto la **Sala Dual del Tribunal Superior de Medellín**,

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR el auto objeto de súplica que se ha detallado al inicio de esta providencia.

SEGUNDO. IMPONER condena en costas por el recurso a cargo de la parte demandante y recurrente en súplica y a favor de la demandada Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia “IPS UNIVERSITARIA”, hoy Hospital Alma Máter. Como agencias en derecho, se fija la suma de **UN SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Los Magistrados,

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

NATTAN NISIMBLAT MURILLO

Firmado Por:

Martha Cecilia Ospina Patiño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 007 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Nattan Nisimblat Murillo
Magistrado
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5e64a34892b2fdb65fba1c820da810e20776d320423da98daf54f3497c57fd1b**

Documento generado en 23/11/2023 10:05:42 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>